



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2019 00065 00

Bogotá, D.C., cinco (5) agosto de dos mil veintiuno (2021).

Referencia:

Expediente: 11001 33 35 010 **2019 00065 00**
Accionante: Fabiola Gutiérrez Martínez
Accionado: Hospital Militar Central.
Clase: Ordinario - nulidad y restablecimiento del derecho

El Despacho procede a pronunciarse sobre los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación, que interpuso la parte actora contra el auto de 20 de mayo de 2021.

Para decidir se **CONSIDERA:**

La providencia objeto del recurso contiene varias decisiones porque se expidió bajo el procedimiento de la sentencia anticipada, previsto en el artículo 182A. Sin embargo, la inconformidad únicamente se manifiesta frente a aquella que negó las pruebas solicitadas en el correspondiente acápite de la demanda. La defensa se opuso a la prosperidad del recurso horizontal, en razón a que la providencia se ajusta a las previsiones del artículo 13 del Decreto 806 de 2020, que también trata sobre la sentencia anticipada.

Procesalmente, el auto que niega el decreto de pruebas es susceptible de los recursos de reposición y, subsidiariamente, el de apelación. Expresamente, el artículo 243 (Num. 7º) del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, dispone que el recurso de apelación procede contra el auto que niegue el decreto de pruebas, mientras que el siguiente artículo 244, en su numeral 1º, aclara que *“La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición”*.

Por tanto, para superar el aspecto procesal, sólo restaría verificar que los recursos se formularon oportunamente, pues el recurrente tiene un plazo común de tres (3) días, según los artículos 244 (Num. 3º) del CPACA, modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021, y 318 del CGP. En este caso, el auto de 20 de abril de 2021 se notificó al siguiente día 21 y el escrito de alzada se radicó el 24 de mismo mes. Entre tales días – 19 y 24 - no transcurrió más de tres días hábiles, por lo cual se puede afirmar que los recursos se interpusieron oportunamente.



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2019 00065 00

Despejada la inquietud procesal, se procederá al estudio del recurso de reposición, para lo cual se estima necesario indicar el orden que se seguirá para determinar si le asiste o no razón a la parte que interpone el recurso horizontal. En primer lugar, se procederá a identificar las pruebas solicitadas con la demanda y la razón por la cual se negaron. Luego se sintetizará los argumentos expuestos en el recurso. Finalmente, se decidirá si hay lugar a mantener o revocar la decisión recurrida.

Básicamente, el libelista solicitó informe escrito bajo la gravedad de juramento, y el certificado de factores salariales que sirven de base para liquidar las prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social, más copia de la planilla de turnos, y en subsidio que se solicitó la inspección judicial. El Despacho negó el informe escrito bajo juramento porque perseguía que confesarán los hechos de la demanda, prueba prohibida por el artículo 217¹ del CPACA, y se suplía con las pruebas allegadas al expediente. Frente al aludido certificado, se estimó que la información requerida se aportó con la contestación de la demanda. Ello implicaba declarar inconducente e inútil la inspección judicial. En síntesis, se negaron las pruebas en cuanto que la entidad las aportó con la demanda.

La parte actora solicita que se reponga y decreten todas las pruebas solicitadas, en razón a que en los documentos aportados con la demanda no determinan con claridad la información sobre la forma de pago y liquidación de la jornada extraordinaria, el horario de trabajo y turnos. De manera que, a criterio de la recurrente, la imprecisión de las pruebas aportadas ameritaba decretar las pruebas solicitadas – certificado e inspección judicial -, y justificaba el informe bajo la gravedad de juramento.

Fíjense en que la parte actora reconoce que la información que quería recopilar, mediante el informe juramentado, el aludido certificado y la inspección judicial, la había suministrado la entidad con los documentos aportados con la contestación de la demanda. La inconformidad de la demandante, alude a aspectos de la valoración de la prueba. Vale decir, a criterio del libelista, las pruebas que allegó la

¹ ARTÍCULO 217. DECLARACIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.



entidad no le permiten demostrar los supuestos fácticos de las pretensiones de la demanda.

Al respecto, el artículo 167 del CGP es claro al señalar que *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*. Se debe precisar, que la norma no obliga a la contraparte a elaborar las declaraciones en documentos a conveniencia de quien la acusa. Ello sería relevar a la accionante de asumir la carga probatoria, pues en el desarrollo de la relación laboral se generan documentos que bien pudo haber recopilado para entregarlos en el juicio.

Vemos, entonces, que la estrategia probatoria de la demandante descansa totalmente en las declaraciones documentales que realice el empleador. Tal dependencia, no se puede utilizar para forzar a la entidad a decir lo que le conviene a los intereses de la parte que la lleva a juicio, puesto que ello vulneraría el debido proceso y el derecho de defensa de la administración.

Así, se pone en evidencia que la demandante no persigue claridad en la prueba, sino que la entidad reconozca mediante informe y documentos los hechos de la demanda. Tal intención no puede ser de recibo, porque la administración sólo puede consignar lo que revela la documentación que obra en la entidad, más no aquello que la demandante quiere ver reflejado en la información solicitada. Ello resulta notoriamente impertinente, y en la práctica, revela que la demandante quiere la confesión de la entidad, lo cual se reitera prohíbe el artículo 217 del CPACA.

En tal sentido, no se puede perder de vista que los trabajadores, durante el desarrollo del vínculo laboral, tienen acceso a la información sobre las condiciones en que ejecutan las actividades y forma de pago, por lo que, al llegar al juicio, no se pueden liberar de la carga de la prueba, menos aún transferirla al empleador, pues a quién le corresponde asumirla es a la demandante a través de los medios de prueba naturales que generan y rodean la relación laboral.

Adicionalmente, el Despacho considera que no es esta la oportunidad procesal para realizar la valoración de la prueba sino al momento de la sentencia. Así lo dispone el artículo 280 del CGP, según el cual *“La motivación de la sentencia deberá*



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2019 00065 00

limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas”

Por lo anterior, el Despacho considera que, al estimar, mediante auto de 20 de mayo de 2021, que las pruebas solicitadas habían sido aportadas con la demanda, se ajusta al criterio de autorresponsabilidad probatoria, por consiguiente, no se hará la reposición de la aludida providencia.

Por otra parte, la demandante manifestó que la fijación del litigio también adolece de imprecisión porque no se refiere a los aportes a la seguridad social. El Despacho observa que no existe imprecisión en la fijación del litigio, pues como lo señala la demandante el término “prestaciones sociales” incluye los aportes a la seguridad social. Vale recordar que siempre se ha considerado como beneficios prestacionales a cargo del empleador, hacer los aportes a las entidades que asumen la carga administrar las contingencias a las que se expone el trabajador. Por ello, al utilizarse la expresión prestaciones sociales en la fijación del litigio, ello incluye los aportes pensionales. Adicionalmente, el Juzgado tiene la obligación de pronunciarse sobre todas las pretensiones que se formulan con la demanda. Así que tampoco se repondrá en tal sentido la aludida providencia.

Como al inicio de esta providencia se apreció que resulta procedente tanto el recurso de reposición como el de apelación, sólo resta decir que la alzada se concederá en el efecto devolutivo, conforme lo dispone el artículo 243 (Par. 1^{o2}) del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021.

Sin embargo, el demandante deberá proveer para las copias **físicas** de la demanda, la contestación de la demanda, del auto apelado, el recurso y la presente providencia.

El interesado en que se surta el recurso, tendrá un término de cinco (5) días para realizar las diligencias para recaudar las aludidas copias, “so pena de declararlo desierto”, como lo preceptúa el artículo 324 del CGP. Ello implica solicitar cita para retirar los folios correspondientes, fotocopiarlos, y entregarlos a la Secretaría, quien

² **PARÁGRAFO 1o.** El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2019 00065 00

remitirá la alzada al superior en los términos del artículo del artículo 324 (Inc. 2º) ibídem.

Por lo expuesto, se **RESUELVE**:

PRIMERO. NO REPONER el auto de 20 de mayo de 2021 en cuanto al aspecto probatorio, ni se aclara la fijación del litigio, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO. CONCEDER, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación que interpuso la parte actora contra el auto de 20 de mayo de 2021, en cuanto que se negó la prueba solicitada.

CUARTO. ORDENAR al recurrente que realice las diligencias pertinentes para recaudar las copias físicas de la demanda, la contestación de la demanda, del auto apelado, el recurso, la oposición al recurso y la presente providencia, conforme a lo arriba expuesto. Para el efecto, se le concede un término de cinco (5) días, so pena de declarar desierto el recurso de apelación.

QUINTO. REMÍTANSE las copias suministradas por el interesado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los términos del artículo 324 (Inc. 2º) del Código General del Proceso.

Notifíquese y cúmplase


JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ

gpg